nombre de sus agentes, y pasará la liquidación á la Intervención, á los efectos que determina su reglamento.

La liquidación girará sobre el importe de las primas cobradas por las Compañías.

Al liquidar el impuesto se deducirán las primas correspondientes á contratos cuya anulación ó reducción se justifique debidamente, pero imputando en el importe total de las primas las indemnizaciones que perciban las Compañías á consecuencia de la anulación de los seguros, ya sea en virtud de las disposiciones del Código de Comercio, ya de las estipulaciones de la póliza ó por transacciones ó arreglos posteriores.

Art. 5º La Tesorería, al practicar las operaciones necesarias para la cobranza, tendrá en cuenta que los derechos liquidados trimestralmente por este concepto á favor de la Hacienda se han de hacer efectivos de una vez, y que las cuotas correspondientes á las comisiones de los agentes, que habrán sido retenidas por las Compañías, han de ser satisfechas por las mismas.

CAPITULO III.

Garantías exigibles á las Compañías.

Art. 6º Todas las Compañías y Sociedades de seguros nacionales ó extranjeras sujetas al pago del impuesto, quedan obligadas á invertir 200.000 pesos en valores del Estado español ó en cédulas ú obligaciones hipotecarias de Bancos ó Compañías de caminos de hierro. Empresas industriales de cualquiera otra clase ó en propiedad territorial de la Península ó islas adyacentes ó de las provincias de Cuba ó Puerto-Rico.

Si las tres cuartas partes de las reservas técnicas de los seguros realizados en cualquiera de las mencionadas islas de Cuba y Puerto-Rico por alguna Compañía no llegasen á 200.000 pesos podrá la que se encuentre en este caso limitar al 75 por 100 de esas reservas el depósito de que trata el parrafo precedente.

Las Sociedades cuyos estatutos no tijen la cuantía de las reservas técnicas ó las provisiones para atender á los riesgos en curso, se entenderá que el depósito de que trata el artículo 32 de la ley de Presupuestos consistirá en el 20 por 10 de las primas realizables durante el año, cantidad que se declara equivalente á las tres cuartas partes de las reservas ó provisiones mencionadas.

Art. 7º Por reservas técnicas se entenderán los fondos de garantía destinados á responder de los contratos pendientes, sin contar las reservas especiales que las Compañías puedan establecer con arreglo á sus estatutos para reforzar las técnicas ó matemáticas.

Art. 8º Si las reservas técnicas se invierten en valores del Estado español, serán éstos recibidos al tipo que se haya fijado para las fianzas de contratos, de servicios y de obras públicas. Si se invirtiesen en cédulas ú obligaciones hipotecarias de Bancos, Compañías de Caminos de hierro ó Empresas industriales, se determinará el cambio por el término medio de la cotización oficial del mes anterior al en que se constituyó el depósito, pudiendo éste revisarse á instancia del Estado ó de la Compañía, transcurrido un año desde su otorgamiento, siempre que el valor de que se trata haya sufrido una variación de 5 por 100 á lo menos.

Si las reservas técnicas se invierten en todo ó en parte en fincas urbanas, deberán estar situadas en capitales de provincia ó en poblaciones que excedan de 20.000 almas, estimándose su valor por la tercera parte del que resulte, capitalizando la renta líquida imponible amillarada, al 4 por 100.

Si se invierte en todo ó en parte en fincas rústicas, se estimará su valor por la tercera parte igualmente del que resulte, capitalizando la renta líquida imponible amillarada al 5 por 100.

A solicitud de las Compañías se deberá realizar la tasación de los bienes ofrecidos en garantía de las reservas y admitir aquéllos por la tercera parte del valor que resulte de la tasación, aun cuando sea superior á la capitalización de la renta, conforme con lo anteriormente expresado y sin perjuicio de hacer las oportunas rectificaciones en los amillaramientos cuando proceda.

Art. 9º Cuando el depósito se constituya en totalidad ó en parte en defectos públicos, la entrega de éstos se hará en la Caja general de Depósitos, debiendo presentarse la carta de pago en la respectiva Administración de Hacienda para la formalización de la garantía.

Si el depósito se constituye en fincas sujetas al pago de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería, se practicará lo siguiente:

1º La Compañía remitirá á la Administración de Hacienda de la provincia en que aquélla tenga su domicilio social ó la residencia de su representación general en la isla, si es extranjera, los títulos de pertenencia de las fincas ó testimonio de ello en forma legal, con nota expresiva de hallarse inscritas en el Registro de la propiedad; una certificación de esta oficina que acredite no estar hipotecadas á responsabilidad alguna, ó que determine aquella á que estuviesen afectas, y otra certificación del Ayuntamiento del término jurisdiccional en que estuvieren enclavadas, en la que, con relación al amillaramiento corriente, y á ser posible, a los del quinquenio vencido á la fecha de expedirse dicha certificación, se consigne la renta líquida imponible de las mismas.

2º Con presencia de estos antecedentes, se forma-

rá expediente por la Administración, en que después de informar el Abogado del Estado sobre los títulos de propiedad, y la Administración é Intervención sobre las liquidaciones practicas para demostrar si dichas fincas ofrecen el valor real por el que deben ser apreciadas para cubrir el importe del depósito, el Jefe de dicha Administración de Hacienda resolverá autorizando á la Compañía, con devolución de los títulos de propiedad, para que proceda á otorgar la correspondiente escritura.

3º La primera copia, inscrita en el Registro de la propiedad, se unirá al expediente de que se trata.

Art. 10. Si las fincas estuviesen disfrutando de exención temporal de pago de contribución por cualquiera de las causas que determina la legislación del ramo, el expediente previo á la formalización de la escritura se hará en la misma forma anteriormente expresada; pero la certificación de la renta líquida imponible con que figuran en el amillaramiento las fincas se sustituirá con certificación jurada de su tasación, hecha por el Inspector técnico que represente á la Administración y por un perito nombrado por la Compañía, ó por la de un tercero que designe la Intendencia general de Hacienda, en caso de que exista disconformidad entre los primeros.

Art. 11. Se concede un plazo de seis meses, contados desde 1º de Enero próximo, para que las Compañías de seguros constituyan los depósitos y garantías de que trata este capítulo.

Art. 12 En el caso de que las Compañías que operen en las islas entren en el período de liquidación ó retiren sus agencias del territorio, el Jefe de la Administración de Hacienda de la provincia á cuya disposición esté constituido el depósito, no cancelará la obligación mientras no queden reintegrados en sus créditos los asegurados españoles.

Art. 13. El depósito, excepción hecha del caso á que se refiere el artículo 8º, será irreducible mientras la Compañía que lo haya constituido tenga operaciones pendientes en el territorio de la isla.

Art. 14. Las Compañías y sus agentes podrán alzarse de las resoluciones que lastimen sus derechos ó intereses, en la forma y dentro de los plazos que determina la legislación vigente.

CAPITULO IV.

Investigación.

Art. 15. La Inspección administrativa, con vista de la relación anotada en el art. 3º con la letra B, del documento señalado en el propio artículo con la letra C y del balance especial remitido anualmente por las Compañías, practicará cuantas gestiones investigadoras sean precisas para que no se defrauden los intereses de la Hacienda.

A este efecto, formarán un Registro por orden alfabético de apellidos, en que consten todos los asegurados que tengan su residencia en cada provincia de la isla, cuidando de adicionarlo con las altas que ocurran y de anotar las bajas; hará relación en la misma forma por cada una de las restantes provincias, á fin de que por las Administraciones de Hacienda sean enviadas á las Administraciones respectivas; comprobará, tanto por los signos externos que las Compañías establecen para señalar determinadas clases de seguros, como por las noticias particulares y por los antecedentes que puedan adquirir, si algún asegurado no figura en el Registro; inspeccionará, si lo estima preciso, los libros de la Sociedad ó Compañía; dará cuenta á las Administraciones de Hacienda de los trabajos que practique para descubrir las ocultaciones por este impuesto, y formará las primeras diligencias de los expedientes de defraudación que corresponda instruir.

Respecto de los seguros á que se refiere el apartado 4º del artículo 3º, el Registro de que se trata en este artículo contendrá un apéndice por índice alfabético de Sociedades, en que consten las pólizas de cada una por el orden de su numeración.

CAPITULO V.

De la defraudación y penalidad.

DEFAUDACIÓN.

Art. 16. Serán considerados defraudadores:

1º Las Compañías que no presenten previamente en las Administraciones de Hacienda de las provincias de su domicilio social ó de su representación general la declaración duplicada de alta.

2º Los agentes que no cumplan igual formalidad en la provincia en que tengan su residencia habitual.

3º Las Compañías ó agentes que habiendo sido dados de baja en la matrícula como consecuencia de su declaración de cese, continúe realizando operaciones.

4º Las Compañías que dejen de presentar en los plazos marcados alguno de los documentos señalados en el artículo 3º, cometan en dichos documentos inexactitud ó falsedad en perjuicio de la Hacienda.

5. Las que no constituyan el depósito dentro del período que se fija en el artículo 11.

6. Las que al determinar el importe total de las reservas técnicas de los seguros realizados en la isla cometan inexactitud ó falsedad en perjuicio de los asegurados.

7º Todo funcionario público, de cualquier clase y categoría, que contraviniendo á las prescripciones de

esta instrucción, dé motivo con sus actos á que se cometa defraudación.

PENALIDAD.

Art. 17. A toda Compañía comprendida en los casos 1º y 3º, así como á los agentes incurso en el 2º, se impondrá:

1º El pago de las cuotas que hubiera debido satisfacer en el año corriente y en los dos anteriores.

2º Un recargo equivalente á la cuota de un año. Del pago de la penalidad que se imponga á los agentes, son responsables las Compañías.

Art. 18. A las comprendidas en el caso 4º se impondrá:

1º La cuota que le corresponda satisfacer por la cantidad objeto del fraude.

2º Un recargo equivalente á otro tanto de dicha cuota.

En el caso en que no pueda determinarse el importe de la cuota anual, se tomará como base para fijar ésta la satisfecha en el año anterior por la Compañía de igual naturaleza que más contribución haya satisfecho.

Art. 19. Las que se coloquen en el caso 5º transcurrido el plazo legal, además de satisfacer una multa del tanto al duplo de la cuota de contribución pagada en el último año, serán intervenidas por los funcionarios que designe la Intendencia general de Hacienda de la respectiva isla, entendiéndose que los sueldos señalados por la misma se abonarán por las Compañías.

Art. 20. Las comprendidas en el caso 6º pagarán una multa igual á la señalada en el artículo precedente, y aumentarán al total importe de la garantía que debieran haber constituido en depósito una suma igual á la ocultada.

Art. 21. A los funcionarios públicos de todas clases, comprendidos en el caso 7º, se les impondrá una multa equivalente á las dos terceras partes del recargo que se haya impuesto ó que corresponda imponer á las Compañías defraudadoras, sin perjuicio de la responsabilidad criminal que proceda en el caso de haber cometido cualquier delito de los definidos en el Código penal.

Art. 22. La presente instrucción adicional empezará á regir en 1º de Enero próximo, quedando derogadas todas las disposiciones que se opongan á lo prevenido en la misma.

ARTÍCULO TRANSITORIO.

Para que la Administración tenga el debido conocimiento de los contratos de seguros celebrados con anterioridad, los Directores y Gerentes de las Sociedades de que se trata remitirán antes del 31 de Marzo próximo venidero á las respectivas Administraciones de Hacienda una relación nominal certificada, en la que, con separación y por orden alfabético de provincias, se determinen los nombres y domicilio de los asegurados hasta el día 30 de Enero inmediato, el importe de la prima anual, el número de la póliza, los nombres y residencias de los agentes y de la comisión que perciben.

Madrid, 1º de Diciembre de 1893.—Aprobado por S. M.—MAURA.

Lo que se publica en la GACETA OFICIAL para general conocimiento.

Puerto-Rico, Diciembre 23 de 1893.—El Administrador Central, Antonio de Olózaga. [1661]

El Ilmo. Sr. Intendente general de Hacienda con fecha 15 del actual, dice á este Centro lo siguiente:

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número 542 y con fecha 24 de Noviembre próximo pasado, se comunica al Excmo. Sr. Gobernador General la Real orden que sigue:—Excmo. Sr.:—Publicados en la Gaceta de Madrid correspondiente al día 1º del actual los Convenios de Comercio últimamente concluidos con Suecia y Noruega: S. M. el Rey (D. G.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer remita á V. E. un ejemplar del mencionado número á fin de que V. E. se sirva ordenar la inserción de texto de dichos Convenios en el PERIÓDICO OFICIAL de esa Isla, y en su día puedan hacerse efectivos los beneficios concedidos por ellos á los precitados países.—De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos expresados con inclusión del ejemplar que se cita.—Y acordado el cúmplase por S. E. con fecha de ayer, la trasiado á V. S. para su conocimiento y efectos indicados, acompañando el ejemplar de la Gaceta de Madrid á que hace referencia.

Ministerio de Estado.

LEYES.

DON ALFONSO XIII por la Gracia de Dios y la Constitución Rey de España y en su nombre y durante su menor edad la Reina Regente del Reino.

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo único. Se autoriza al Gobierno de S. M. para ratificar el Convenio de Comercio celebrado entre